

«Fallamos: Primero. Estimar el recurso contencioso-administrativo objeto del presente por no ser conforme a derecho la resolución recurrida y, en consecuencia, procedemos a anular la citada resolución dejándola sin efecto.»

He tenido a bien disponer que se cumpla la mencionada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 1 de febrero de 1993.

DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

5307 *ORDEN de 1 de febrero de 1993 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 26 de octubre de 1992, en recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Palomar Lodares.*

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Palomar Lodares contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la Dirección General de los Registros del Notariado, de 28 de julio de 1989, que declaró indamisible, por extemporáneo, el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de la Junta directiva del Ilustre Colegio Notarial de Albacete, de 16 de octubre de 1988, sobre la impugnación de la minuta de honorarios del Notario de San Clemente don Alejandro Soto Ruiz, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con fecha 26 de octubre de 1992, ha dictado la sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que rechazando las causas de inadmisibilidad planteadas, y entrando a conocer sobre el fondo del asunto, debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Jesús Palomar Lodares, contra el acto presunto por silencio administrativo negativo del recurso de reposición deducido contra dicha parte contra la resolución dictada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, de fecha 28 de julio de 1989, por la que se declaró inadmisibile, por extemporáneo, el recurso de alzada interpuesto por la misma parte contra el acuerdo de la Junta directiva del Colegio Notarial de Albacete de fecha 16 de octubre de 1988.»

He tenido a bien disponer que se cumpla la mencionada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 1 de febrero de 1993.

DE LA QUADRA-SALCEDO
Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

5308 *ORDEN de 12 de febrero de 1993 por la que se dispone la clausura del Centro Penitenciario de Ciudad Real.*

La infraestructura del establecimiento penitenciario de Ciudad Real es inadecuada para el cumplimiento de los fines de reeducación y reinserción social que deben presidir la intervención penitenciaria. Además, es necesario dar cumplimiento a las previsiones del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de julio de 1991, una vez que el número de plazas existentes en centros de su contorno son suficientes para atender a la población reclusa que actualmente alberga, y, en consecuencia, proceder a su cierre.

En su virtud, he dispuesto:

Primero.—Clausurar el Centro Penitenciario de Ciudad Real.

Segundo.—Autorizar a la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios para que adopte cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de lo anterior.

Lo que comunico a V. I. a los efectos pertinentes.
Madrid, 12 de febrero de 1993.

DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNANDEZ DEL CASTILLO

Ilmo. Sr. Secretario general de Asuntos Penitenciarios.

5309 *RESOLUCION de 27 de enero de 1993, de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2.ª) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, con sede en Valencia, dictada en el recurso número 992/1990, interpuesto por don Antonio Encinas Rodero.*

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2.ª) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, con sede en Valencia, el recurso número 992/1990, interpuesto por don Antonio Encinas Rodero contra la Resolución de 1 de marzo de 1990, de la Subdirección General de Personal de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia, que desestima su petición formulada el 10 de octubre de 1989, sobre asignación de cometidos y funciones, la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2.ª) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, con sede en Valencia, ha dictado sentencia de 24 de noviembre de 1992, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: I. Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Encinas Rodero contra la Resolución de 1 de marzo de 1990, de la Subdirección de Personal de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia, que desestima su petición formulada el 10 de octubre de 1989, y denunciada la mora el 29 de enero de 1990, sobre asignación de cometidos y funciones.

II. En consecuencia, se anulan y dejan sin efecto los anteriores actos de la Administración, por no aparecer ajustados a derecho.

III. Se reconoce, como situación jurídica individualizada del recurrente, su derecho a que le sean asignadas funciones y cometidos propios de puestos de trabajo correspondientes al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias al que pertenece, debiendo la Administración abstenerse de encomendarle tareas atribuidas a Cuerpos inferiores, condenando a la Administración a estar y pasar por tal pronunciamiento.

IV. No procede hacer imposición de costas.»

En su virtud, esta Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 27 de enero de 1993.—El Secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción Hernández.

Ilmo. Sr. Director general de Administración Penitenciaria.

5310 *RESOLUCION de 29 de enero de 1993, de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5.ª) de la Audiencia Nacional de Madrid, dictada en el recurso número 5/500.557, interpuesto por don Antonio Pascual Rodríguez.*

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5.ª) de la Audiencia Nacional de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 5/500.557, interpuesto por don Antonio Pascual Rodríguez contra Resolución del Ministerio de Justicia, de 6 de febrero de 1990, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra otra de dicho Ministerio, de 9 de octubre de 1989, por la que se impone la sanción de dos días de suspensión de funciones por la comisión de una falta grave, la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5.ª) de la Audiencia Nacional de Madrid, ha dictado sentencia de 12 de mayo de 1992, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan José Pulido Díaz, en nombre de don Antonio Pascual Rodríguez, contra Resolución del Ministerio de Justicia, de 9 de octubre de 1989 y 6 de febrero de 1990, a la que la demanda se contrae, declaramos que las resoluciones impugnadas no son conformes a derecho, y como tal las anulamos, dejando sin efecto la sanción impuesta al recurrente, con todas las consecuencias inherentes, y sin hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, esta Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 29 de enero de 1993.—El Secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción Hernández.

Ilmo. Sr. Director general de Administración Penitenciaria.

5311

RESOLUCION de 5 de febrero de 1993, de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, dictada en el recurso número 1.003/1990, interpuesto por don Enrique García Marañón.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, el recurso número 1.003/1990, interpuesto por don Enrique García Marañón contra resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 1 de marzo de 1990, que desestima su petición formulada el 10 de octubre de 1989, la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha dictado sentencia de 7 de diciembre de 1992, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: I. Rechazando las causas de inadmisibilidad alegadas por la Abogacía del Estado, se estiman los recursos contencioso-administrativos números 1.003/1990, acumulado al 8/1992, interpuestos por don Enrique García Marañón contra la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 1 de marzo de 1990, que desestima su petición formulada el 10 de octubre de 1989 y denunciada la mora el 20 de enero de 1990, relativa a la asignación de funciones y cometidos, así como contra la desestimación presunta, mediante silencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto frente a la resolución de dicho Organismo de 13 de junio de 1991, imponiéndosele sanción disciplinaria por falta grave.

II. Se anulan, por ser contrarios a derecho, los actos administrativos a que se refieren los presentes recursos.

III. Se reconoce, como situación jurídica individualizada de la parte recurrente, su derecho a que le sean asignados cometidos y funciones acordes con el Cuerpo y grupo de pertenencia, condenando a la Administración a estar y pasar por tal pronunciamiento.

IV. No procede hacer imposición de costas.»

En su virtud, esta Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 5 de febrero de 1993.—El Secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción Hernández.

Ilmo. Sr. Director general de Administración Penitenciaria.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

5312

ORDEN de 2 de febrero de 1993 por la que se concede a la Sociedad «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima» (ENDESA), los beneficios fiscales a que se refiere el Decreto 175/1975, de 13 de febrero, sobre régimen de concierto con el sector eléctrico, relativos a las obras de construcción y montaje de las instalaciones correspondientes a la ampliación de la central diesel generadora de energía eléctrica de Melilla.

Vista la sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de junio de 1992, y en su virtud,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, acuerda:

Primero.—A los efectos del concierto celebrado y teniendo en cuenta los planes financieros y técnicos de la Entidad concertada «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad Anónima» (ENDESA), número de identificación fiscal A.28.023.430, se conceden a la misma los siguientes beneficios fiscales con arreglo al procedimiento señalado por la Orden de 27 de marzo de 1965 y en relación con los tributos cuya gestión y administración se atribuye a la Hacienda Pública:

Uno. Como contraprestación a las obligaciones que adquiere la Entidad concertada, se otorgan los siguientes beneficios fiscales previstos en la cláusula novena del acta general en relación con las inversiones a que se refiere la presente acta específica que se realicen antes del 1 de enero de 1986:

A) Exención de la cuota de licencia fiscal durante el período de instalación.

B) Aplicación en su grado máximo de los beneficios regulados por el artículo 1.º del Decreto-ley 19/1961, de 19 de octubre.

C) Aplicación de los beneficios de apoyo fiscal a la inversión en los términos establecidos en los Decretos-leyes 3/1974, de 28 de junio, y 6/1974, de 27 de noviembre, y en la Orden del Ministerio de Hacienda de 10 de abril de 1975.

D) Libertad de amortización para las instalaciones objeto del concierto, durante los primeros cinco años, a partir del comienzo del primer ejercicio económico en cuyo balance aparezca reflejado el resultado de la explotación industrial en las nuevas instalaciones.

E) Reducción del 95 por 100 de los impuestos siguientes:

Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los términos establecidos en el artículo 66, número 3, del derogado texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto 1018/1967, de 5 de abril, que grave las ampliaciones de capital de las Empresas concertadas.

Impuesto General sobre Tráfico de Empresas, Derechos Arancelarios e Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que graven las importaciones de los bienes de equipo y utillaje de primera instalación que correspondan a inversiones previstas en el acta de concierto, siempre que, previo informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se acredite que tales bienes no se fabrican en España y que el proyecto técnico que exija la importación de materiales extranjeros no puede ser sustituido desde el punto de vista económico y técnico por otro en el que la industria nacional tenga mayor participación. Este beneficio podrá hacerse extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en España, se importen para su incorporación a bienes de equipo de fabricación nacional.

Dos. La aplicación de los beneficios citados en el número uno anterior se ajustará en particular a las siguientes normas:

Primera.—La libertad de amortización durante el primer quinquenio alcanzará a las instalaciones cuya explotación industrial se inicie antes del 1 de enero de 1986, siempre que tales instalaciones figuren concretamente incluidas en actas suscritas con anterioridad al 28 de febrero de 1980.

Segunda.—Los límites temporales señalados en el número uno y norma anterior no serán susceptibles de prórroga alguna.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume la Entidad concertada en las respectivas cláusulas del acta general de concierto y en el acta específica que desarrollan las mismas, podrá ser sancionado con la privación de los beneficios concedidos como consecuencia de este concierto, incluso con carácter retroactivo si dicho incumplimiento fuere grave, y, por consiguiente, al abono o reintegro, en su caso, de las bonificaciones o exenciones ya disfrutadas.

Si el incumplimiento no fuera grave, la privación de los beneficios concedidos no tendrá carácter retroactivo. Asimismo y en función de la importancia del incumplimiento, la Administración podrá considerar la privación parcial y/o temporal de los beneficios concedidos o la sustitución de la sanción de pérdida de beneficio por otra de carácter pecuniario.

Tercero.—En el caso de que el incumplimiento fuera debido a fuerza mayor, riesgo imprevisible o a demora por parte de la Administración en la resolución de las cuestiones de las que pudiera depender el incumplimiento, no se producirá la suspensión del beneficio si se acreditara debidamente, a juicio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la realidad de las causas mencionadas.

Cuarto.—Para la determinación del incumplimiento se instruirá un expediente de sanción que se ajustará a lo establecido en los artículos 133 al 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y será tramitado en la forma establecida en la cláusula 12 del acta general de concierto.